

La mesa por los derechos humanos pide que el traslado de Campsa no cueste dinero a los ciudadanos

La mesa por los derechos humanos considera injusto que el Ayuntamiento deba financiar parte del traslado de las instalaciones que la empresa estatal Campsa mantiene en el casco urbano de la ciudad, tal y como argumenta la respuesta dada por el Gobierno al senador por Málaga del Grupo Popular, Enrique Bolín.

La mesa hizo pública ayer una relación de problemas que afectan a los derechos humanos, en la que incluyeron su desacuerdo por la respuesta gubernamental referente al traslado de los depósitos de Campsa. Esta plataforma considera que el desmantelamiento de los depósitos del casco urbano debe realizarse de inmediato y no debe suponer ningún coste para los ciudadanos, argumen-

tando que hay ciudades, como la de Valladolid, a las que no les ha costado un céntimo. Entre los temas locales la mesa destaca «la permanente situación de marginación» en la que viven sesenta niños gitanos en el Monte Gurugu (Mijas) y el incumplimiento por parte de la Administración de los programas de promoción de viviendas públicas.

Asimismo, la mesa se hace eco en un telegrama enviado al embajador de Irak sobre la tortura de niños en este país, denunciada recientemente por Amnistía Internacional. Entre los temas de ámbito nacional la plataforma pide la desaparición de la pena de muerte en caso de guerra que contempla el nuevo Código de Justicia Militar; el derecho constitucional



Miembros de la mesa por los derechos humanos

a la objeción de conciencia y su solidaridad con los insumisos y, por último, insta al Gobierno a realizar campañas de concienciación para reducir la producción y consumo de envases de

esprái con el objeto de frenar la desaparición de la capa de ozono.

A la decena de asociaciones que constituyeron hace poco un más de un mes la mesa por los derechos humanos se han su-

mado dos nuevos colectivos: el Partido Radical Transnacional y la Coordinadora de Transeúntes.

Montse Martín
Foto Salas